



Por Alberto Sileoni, Ministro de Educación de la Nación

El 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, fue instituido desde el 2006 como feriado nacional, por lo que actualmente está incorporado al calendario escolar. Como Estado Educador, trabajamos para que las efemérides escolares no se conviertan en meras formalidades retóricas.

Nosotros, como Estado Educador, trabajamos para que las efemérides escolares no se conviertan en meras formalidades retóricas, sino en momentos de conmemoración conjunta y, por lo tanto, espacios privilegiados para el ejercicio de la memoria.

Los treinta y cinco años del golpe de Estado nos ofrecen una nueva oportunidad para reflexionar sobre el pasado argentino reciente pero también sobre nuestro presente y futuro.

Porque siempre que recordamos lo hacemos desde el presente y en un contexto determinado.

Existen tiempos y espacios oportunos para el recuerdo.

La memoria es, en este sentido, una forma de recuerdo social que se pregunta qué, cómo y para qué.

Y creemos que la escuela es un espacio propicio para ejercer esta forma del recuerdo y, a través de ella, reflexionar sobre el pasado colectivo. También sabemos que todo pasado está sujeto a controversias.

En las luchas por la memoria intervienen diferentes sectores sociales que, de acuerdo a sus saberes, sus intereses y sus experiencias, sostienen una visión sobre el pasado y a partir de ahí construyen sus posiciones, que pueden diferir e incluso ser contrapuestas y estar en pugna entre sí.

Pero las disputas en torno de la memoria, incluyendo la riqueza de sus matices y desavenencias, no pueden soslayar una verdad histórica largamente comprobada y con ella el dictamen contundente de la Justicia argentina: los crímenes de la dictadura fueron juzgados, en primer lugar, durante el Juicio a las Juntas transcurrido en 1985.

A su vez, desde las derogaciones de las leyes de Punto final y Obediencia debida y los decretos de indulto, comenzaron a desarrollarse diversos procesos judiciales contra aquellos que perpetraron violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos.

Esta impronta judicial demuestra un gran avance en el esclarecimiento de la verdad en estos últimos años.

Al mismo tiempo, continuaron los procesos de recuperación de la identidad de personas desaparecidas y de niños apropiados gracias al trabajo ininterrumpido del Equipo Argentino de Antropología Forense y de las Abuelas de Plaza de Mayo.

Este es el contexto desde el que nos proponemos una política educativa de memoria cuyo objetivo principal es acompañar y facilitar la tarea de enseñar en las escuelas estos temas tan complejos como dolorosos.

Una política que, enmarcada en el conjunto de políticas de Derechos Humanos impulsadas por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, enfrenta el desafío de promover explicaciones sobre una de las experiencias más traumáticas de nuestra historia nacional y habilitar preguntas que sirvan para comprender el pasado desde el tiempo presente y que nos permitan construir un futuro deseable.

En el mismo sentido, la tarea supone la reconstrucción de aquella experiencia atendiendo a los diferentes modos en que fue vivida a lo largo del territorio nacional.

La búsqueda debe ser la edificación de un relato plural que contemple las memorias de las pequeñas localidades y de los principales centros urbanos; y que incorpore las voces del norte, centro y sur del país.

A su vez, esta pluralidad debe atender a los matices generacionales prestando atención a las transformaciones que las distintas épocas imprimen en los modos de ser jóvenes y adultos. Este es, sin duda, un gran desafío que asumimos y que está en diálogo directo con nuestro presente como sociedad.

Un momento histórico en el que el proyecto político del Gobierno Nacional viene ampliando, permanentemente desde el 2003, el acceso a los derechos y nos empuja a repensar los sentidos, los alcances y la importancia de los mismos para cualquier democracia.

Conmemorar en este contexto, potencia todas y cada una de nuestras acciones en la defensa del Estado de derecho y de la plena vigencia de los Derechos Humanos.

Construir la memoria junto a los niños y los jóvenes evidencia nuestro compromiso ineludible con la verdad y la justicia.